

DERECHO PENAL

“Paga o atente a las consecuencias” ¿cuándo una amenaza se convierte en extorsión?

Llamadas, mensajes, cobro de cuotas, amenazas y las nuevas reglas del delito de extorsión en México

Didier Efrén Medina
Abogado

RESUMEN

Una llamada desde un número desconocido. Un mensaje que asegura conocer el domicilio de la víctima. Una amenaza contra su familia. La exigencia de depositar dinero en determinada cuenta. El comerciante al que se le cobra una cuota para poder continuar trabajando. O alguien que amenaza con divulgar información privada si no obtiene aquello que pretende.

Aunque todas estas situaciones suelen identificarse coloquialmente como extorsión, desde el punto de vista jurídico es necesario determinar qué conducta se realizó, qué se exigió a la víctima, mediante qué medios, qué finalidad perseguía el responsable y qué consecuencias produjo.

Desde noviembre de 2025, México cuenta con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que estableció un tipo penal básico aplicable en todo el país y contempla numerosas circunstancias agravantes relacionadas con las características de la víctima, los medios utilizados, la forma de ejecución y el contexto en el que ocurre el delito.

Este artículo explica qué debe entenderse actualmente por extorsión, por qué una amenaza no siempre constituye por sí misma este delito, qué ocurre cuando la víctima no entrega el dinero exigido, cómo funcionan algunas de sus modalidades más frecuentes y qué puede hacer una persona desde el primer contacto para protegerse y conservar información que posteriormente pueda resultar relevante para una investigación.

PALABRAS CLAVE

Extorsión | Amenazas | Cobro de piso | Extorsión telefónica | WhatsApp | Evidencia digital | Denuncia | Víctima | Delito | Ley General de Extorsión | Derecho Penal

I. NO TODA AMENAZA ES EXTORSIÓN

Éste es el primer punto que conviene aclarar. Amenazar y extorsionar no son necesariamente la misma conducta. Una persona puede amenazar a otra con causarle determinado daño y esa conducta puede adquirir relevancia penal conforme a la legislación aplicable, pero para hablar específicamente de extorsión deben analizarse los elementos del tipo penal correspondiente.

La nueva Ley General establece, en su artículo 15, que comete extorsión quien, sin derecho, obliga a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. La pena prevista para el tipo básico es de quince a veinticinco años de prisión, además de multa.



La definición resulta importante porque permite abandonar una idea demasiado estrecha: **la extorsión no consiste únicamente en exigir dinero bajo amenaza**. Puede pretenderse que la víctima entregue algo, realice una conducta, deje de realizarla o tolere determinada situación.

Por eso la pregunta jurídica no debe limitarse a:

“¿Le pidieron dinero?”

Debe preguntarse:

“¿Qué pretendían obligarla a hacer, dejar de hacer, dar o tolerar, y con qué finalidad o consecuencia?”

Ésa es la clave para identificar si nos encontramos ante una extorsión y no ante otra figura delictiva. El análisis debe considerar el contexto, los medios utilizados, la finalidad perseguida y los efectos que la conducta produce en la víctima. Únicamente a partir de una valoración integral es posible determinar la naturaleza jurídica de los hechos.

II. “TENEMOS A TU HIJO”: CUANDO EL MIEDO SE CONVIERTE EN EL INSTRUMENTO

Una de las formas más conocidas de extorsión ocurre a distancia. La víctima recibe una llamada o mensaje. Quien se comunica afirma pertenecer a un grupo criminal, asegura tener información sobre la familia, simula una emergencia, dice que alguien se encuentra detenido o en peligro, o pretende convencerla de que un familiar ha sido privado de la libertad.



El objetivo suele ser producir una reacción rápida. El miedo reduce el tiempo disponible para comprobar la historia. Por eso pueden aparecer instrucciones como: *“No cuelgues.” “No llames a nadie.” “Deposita ahora.” “Si avisas a la policía, habrá consecuencias.”*

La Ley General contempla expresamente como agravante el supuesto en que se exige dinero o un beneficio alegando que alguien se encuentra en una situación de riesgo, peligro inminente o procedimiento legal. También contempla agravantes relacionadas con transferencias a través del sistema bancario, financiero o mediante activos virtuales.

Para la víctima, sin embargo, hay una distinción práctica fundamental: que la persona que llama conozca un nombre, teléfono, domicilio o dato familiar no demuestra por sí mismo que tenga físicamente bajo su control a la persona sobre la que amenaza. La información puede provenir de múltiples fuentes.

Ante una comunicación de este tipo, la prioridad debe ser la seguridad y la verificación de los hechos, evitando que el miedo sustituya por completo la comprobación de aquello que se afirma.

III. ¿Y SI NO PAGUÉ?

Ésta es una de las preguntas más importantes.

Supongamos que alguien recibe un mensaje:

*“Deposita cincuenta mil pesos
o vamos por tu familia.”*

La víctima no paga.

¿Significa que jurídicamente no ocurrió nada porque el responsable no obtuvo el dinero?

No necesariamente.

El análisis penal no puede reducirse al resultado económico final. El artículo 15 no describe exclusivamente una entrega de dinero consumada: comprende obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo y vincula la conducta tanto con la obtención de beneficio o lucro como con la causación de determinados daños o perjuicios.

Además, cuando una conducta no alcanza todos los elementos necesarios para considerar consumado un delito, debe analizarse, según las circunstancias concretas, si pueden actualizarse las reglas generales relativas a la tentativa.



Por ello, no haber entregado el dinero no significa que deban borrarse los mensajes, ignorarse la llamada o concluirse automáticamente que no existe una conducta penalmente relevante.

La forma en que se desarrollaron los hechos importa.

- Qué se exigió.
- Qué actos se realizaron.
- Qué medios se utilizaron.
- Qué consecuencias se produjeron.
- Y hasta dónde avanzó la ejecución.

Todo ello deberá analizarse jurídicamente en el caso concreto.

IV. EL “COBRO DE PISO”: CUANDO TRABAJAR TIENE UN PRECIO IMPUESTO POR OTRO

La extorsión adquiere una dimensión especialmente grave cuando se introduce en la actividad económica cotidiana.

Un comerciante recibe una visita.

Un empresario recibe un mensaje.

Un transportista es advertido de que deberá pagar determinada cantidad periódicamente.

La exigencia puede presentarse bajo distintas expresiones: “cuota”, “protección”, “derecho de piso”, “colaboración” o simplemente pago para poder seguir trabajando.



La nueva Ley General presta especial atención a este fenómeno.

El artículo 16 agrava la sanción cuando la extorsión se comete contra personas que desarrollan actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o de servicios públicos o privados. También contempla situaciones en las que se coacciona a una víctima para contratar determinados proveedores, adquirir bienes o servicios, aceptar precios impuestos o celebrar actos jurídicos.

Esto es particularmente importante porque la extorsión empresarial no siempre adopta la imagen cinematográfica de una persona armada exigiendo una bolsa de dinero.

Puede infiltrarse en decisiones aparentemente comerciales:

“Vas a comprarle a este proveedor.”
“Vas a vender a este precio.”
“Vas a contratar este servicio.”
“Para operar aquí tienes que pagar.”

Cuando la libertad económica se sustituye por una decisión impuesta mediante coacción, el análisis deja de ser exclusivamente comercial.

Puede ingresar directamente al Derecho Penal.

V. CUANDO EL EXTORSIONADOR UTILIZA INFORMACIÓN PRIVADA

La tecnología ha cambiado también la forma de intimidar. Fotografías. Audios. Videos. Conversaciones. Información familiar. Datos personales. Contenido real o manipulado. Todo ello puede convertirse en instrumento de presión.

La Ley General contempla como circunstancia agravante que el responsable utilice información privada de la víctima o de sus familiares —incluidos datos personales, imágenes, audios, textos o videos, reales, manipulados o alterados— para coaccionarla.

Esto introduce una dimensión especialmente contemporánea. Una persona puede recibir una fotografía privada acompañada del mensaje:

“Paga o la publico.”

Otra puede recibir un audio manipulado. Otra, una amenaza basada en información obtenida de redes sociales. Y en otros casos pueden utilizarse imágenes o videos alterados para aumentar la credibilidad de una historia falsa.



La existencia de tecnología capaz de manipular contenido no significa que todo archivo controvertido sea falso. Pero tampoco puede asumirse que una imagen, voz o video es auténtico simplemente porque parece convincente.

Cuando ese material forma parte de una extorsión, preservar el archivo original y las circunstancias en que fue recibido puede adquirir especial importancia probatoria.

LA INFORMACIÓN PRIVADA PUEDE INCLUIR:



Fotografías



Audios



Videos



Conversaciones



Información familiar



Datos personales

La información puede provenir de múltiples fuentes: redes sociales, filtraciones, dispositivos electrónicos, suplantación de identidad o incluso información previamente obtenida en relaciones personales o laborales. Precisamente por ello, el análisis de estos casos requiere valorar el contexto, los medios utilizados, la finalidad perseguida y los efectos que la conducta produce en la víctima.

VI. LA EVIDENCIA EMPIEZA EN EL PRIMER MENSAJE

Cuando una persona recibe una amenaza extorsiva, su primera preocupación —razonablemente— no suele ser construir una carpeta de investigación. Es protegerse.

Pero determinadas acciones realizadas durante los primeros minutos u horas pueden resultar después extraordinariamente importantes. Un mensaje eliminado puede perder información. Una captura recortada puede eliminar fecha, número, usuario o contexto. Un audio reenviado múltiples veces puede dificultar posteriormente determinadas verificaciones. Una conversación aislada puede contar una historia diferente de la secuencia completa.

¿QUÉ CONVIENE CONSERVAR?



- ▶ El número o cuenta desde la cual se produjo el contacto.
- ▶ La conversación completa.
- ▶ Audios recibidos.
- ▶ Fotografías o videos.
- ▶ Datos de perfiles.
- ▶ Fecha y hora.
- ▶ Cuentas bancarias o instrucciones de transferencia.
- ▶ Comprobantes cuando haya existido algún pago.
- ▶ Cualquier comunicación posterior relacionada con los hechos.

Preservar no significa investigar por cuenta propia. Tampoco significa ponerse en riesgo para obtener más información. Significa evitar destruir aquello que ya existe.

En materia de evidencia digital, muchas veces la diferencia entre “me mandaron esto” y poder demostrar técnicamente qué se recibió, cuándo y en qué condiciones depende precisamente de cómo se conservó la información.

VII. ¿CONVIENE BLOQUEAR INMEDIATAMENTE EL NÚMERO?

No existe una respuesta universal para todos los casos.

Si existe una situación de peligro inmediato, la prioridad es la integridad de las personas y la intervención de las autoridades correspondientes. En otros escenarios, antes de eliminar conversaciones o perder acceso a determinada información, puede resultar conveniente preservar aquello que ya se recibió.

Lo que generalmente no resulta aconsejable es convertir a la víctima en investigadora. Algunas conductas pueden aumentar el riesgo o entorpecer una eventual investigación:



Intentar engañar al extorsionador.



Amenazarlo.



Concertar encuentros por cuenta propia.



Enviar información adicional para “ver hasta dónde llega”.

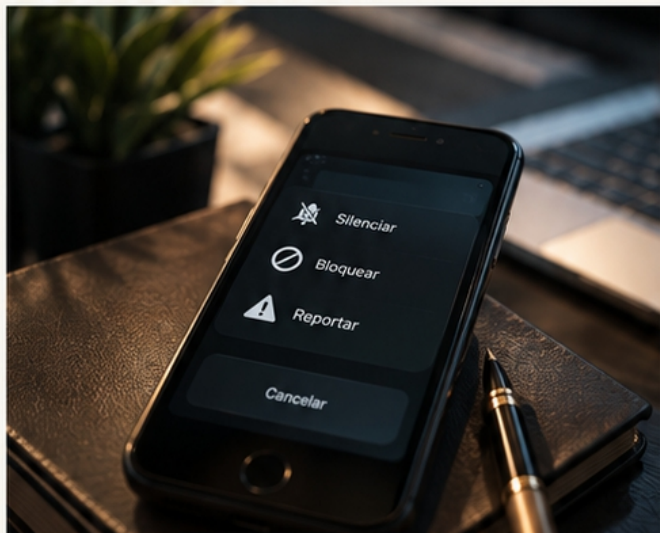


Seguir instrucciones peligrosas con la intención de identificarlo.



O exponerse físicamente para obtener evidencia.

La obtención de información para una investigación penal corresponde a las autoridades dentro del marco jurídico aplicable. La víctima debe proteger evidencia; no producir riesgos nuevos para conseguirla.



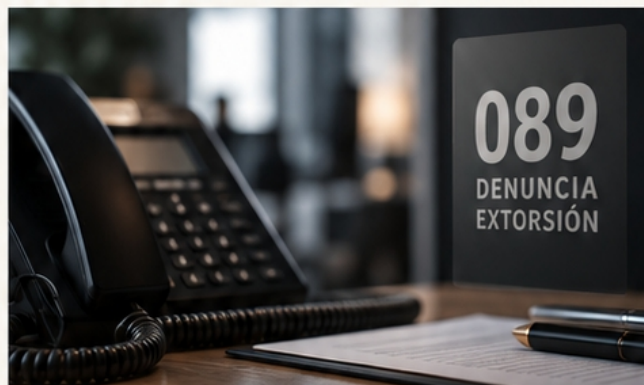
La decisión de bloquear puede ser adecuada en determinados supuestos, especialmente cuando existen riesgos para la seguridad o cuando ya se cuenta con la información relevante. Sin embargo, en otros casos, puede ser aconsejable mantener el contacto —sin responder— durante un tiempo razonable, a fin de conservar los mensajes, audios o llamadas que puedan resultar útiles para una investigación.

En todo caso, la valoración debe hacerse según las circunstancias concretas: el tipo de amenaza, el medio utilizado, la información de la que se dispone y los riesgos involucrados.

VIII. DENUNCIAR SIN CONVERTIRSE EN UNA SEGUNDA VÍCTIMA

Uno de los grandes problemas históricos de la extorsión es el miedo a denunciar. Temor a represalias. Temor a revelar información personal. Temor a que quien extorsiona descubra que se acudió a la autoridad.

La Ley General adoptó mecanismos específicos para enfrentar este problema. El diseño legislativo prevé investigación y persecución de oficio, mecanismos de reserva y protección de identidad y la posibilidad de presentar denuncias mediante el 089, además de crear un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión para recepción, registro, canalización, atención y seguimiento.



Esto no significa que todos los casos tengan idéntico nivel de riesgo. La estrategia de protección debe atender a las circunstancias concretas. No es igual una llamada masiva realizada desde un número desconocido que una extorsión presencial contra un comercio en la que los responsables conocen horarios, trabajadores, familiares y ubicación.

Por ello, denunciar y protegerse no deben concebirse como decisiones contrapuestas.

La protección de la víctima forma parte de la respuesta jurídica frente al delito.

IX. ¿POR QUÉ CAMBIÓ LA LEY?

Hasta 2025, la regulación penal de la extorsión presentaba diferencias entre entidades federativas y coexistía con la regulación federal.

La reforma constitucional de octubre de 2025 facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general que estableciera tipos penales y sanciones en esta materia, y el 28 de noviembre de ese año se publicó la nueva Ley General.



El cambio buscó establecer un tipo penal básico aplicable en toda la República y un marco nacional para prevención, investigación, persecución y sanción. La legislación también distribuye competencias: determinados asuntos corresponden a la Federación y, fuera de esos supuestos, la investigación y persecución corresponden a las autoridades locales.

La nueva estructura incorpora además numerosas agravantes que intentan responder a modalidades contemporáneas de extorsión: afectación a actividades económicas, utilización del sistema financiero, información privada, medios digitales, relaciones de confianza y determinadas características de vulnerabilidad de las víctimas, entre otras.

Para el ciudadano, el cambio tiene una consecuencia especialmente importante:

la extorsión ya no debe analizarse únicamente a partir de la legislación penal particular de cada entidad como ocurría bajo el esquema anterior; existe ahora una Ley General que establece el núcleo nacional de la figura.

X. EXTORSIÓN NO ES SINÓNIMO DE “LLAMADA SOSPECHOSA”

También debemos evitar el extremo contrario.

No toda llamada molesta es extorsión.

No todo intento de fraude es necesariamente extorsión.

No toda amenaza actualiza automáticamente este delito.

No toda exigencia de pago es ilícita: un acreedor puede legítimamente requerir el cumplimiento de una obligación, siempre dentro de los límites jurídicos correspondientes.

Y no todo mensaje agresivo puede clasificarse penalmente sin analizar su contenido y contexto.

El Derecho Penal exige identificar los elementos de la conducta concreta.

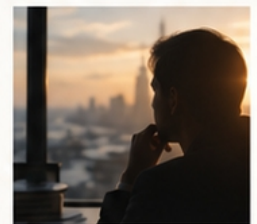
- ¿Existía derecho para exigir aquello?
- ¿Se intentó obligar a la persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo?
- ¿Se buscaba obtener un beneficio o lucro?
- ¿Se produjo alguno de los daños o perjuicios contemplados por la ley?
- ¿Hubo coacción?
- ¿Qué medio se utilizó?
- ¿Existe alguna circunstancia agravante?
- ¿La conducta se consumó o quedó en otro grado de ejecución?

Poner correctamente el nombre jurídico a los hechos importa tanto como investigarlos.

XI. CONSIDERACIONES FINALES

La extorsión se alimenta de una herramienta particularmente poderosa: el miedo.

- Miedo a perder dinero.
- A que dañen a un familiar.
- A que cierren un negocio.
- A que publiquen información privada.
- A que una amenaza se cumpla.



Ese miedo puede llevar a la víctima a actuar con rapidez precisamente cuando más necesita verificar información, protegerse y conservar aquello que permita reconstruir lo ocurrido.

La legislación mexicana cambió profundamente en 2025 con la expedición de una Ley General que estableció un tipo penal básico nacional y un amplio catálogo de circunstancias agravantes. Pero conocer la existencia de la ley no resuelve por sí solo el problema.